



INTERNATIONAL CENTRE FOR  
TRADE AND SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT

# PUENTES

Entre el Comercio y el Desarrollo Sostenible

Vol. 3 No. 2

Septiembre - Octubre 2000

## En esta edición

**El Convenio de Diversidad Biológica y el Acuerdo sobre propiedad intelectual de la OMC parecen establecer regímenes divergentes en lo que tiene que ver con el acceso a los recursos biológicos. El punto de contacto más candente entre ambos regímenes es el Art. 27.3. b) del ADPIC, cuya revisión, en marcha, se perfila como uno de los temas más complejos de la relación comercio-desarrollo sostenible. En este número queremos dar una visión general de esta cuestión. Ver páginas ..... 1, 4, 6 y 15.**

Las negociaciones sobre agricultura y el proceso de revisión de la aplicación de los acuerdos de la Ronda Uruguay continúan su lento progreso, y las señales siguen siendo que ambos temas tendrán una resolución sólo en el marco de una nueva ronda multilateral. Otros temas, como la revisión del Acuerdo sobre los ADPIC, las solicitudes de extensión de plazos de cumplimiento en varios acuerdos y la inminente accesión de China, generan agitación en la OMC. Ver páginas ..... 7 y 8.

Una cuestión que se plantea cada vez con más fuerza es la de la 'transparencia externa', o cómo la OMC se debe volver más accesible a la ciudadanía en general, y a las ONG en particular. El MSD sigue muy activo, con la UE solicitando un pán-el en el caso pez espada y el Organo de Apelaciones invitando a hacer presentaciones espontáneas en el caso asbesto. Ver páginas ..... 9, 10 y 14.

Además, informamos sobre algunas expectativas que despierta la COP-6 sobre cambios climáticos. Ver página ..... 11.

Decisión 486 de la CAN: ¿un paso adelante?	4
Banano: propuesta de la UE vuelve a generar resistencias	10
En qué va el Convenio de Basilea sobre movimientos de desechos peligrosos	11
Se mueve el Comité Mixto de la sociedad civil del Mercosur	13
Calendario de eventos y publicaciones	16

## Biodiversidad y propiedad intelectual

Las discusiones sobre el régimen de propiedad intelectual que establece el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC (ADPIC) siguen ganando fuerza. La revisión del Acuerdo, la expiración de los plazos para su implementación y la consecuente aparición de disputas en el Mecanismo de Solución de Diferencias (como la de Estados Unidos contra Argentina y Brasil por el régimen de patentes farmacéuticas), son algunos de los factores que configuran la vigencia de este tema. A nivel regional se suma el Régimen Común sobre Propiedad Industrial (Decisión 486) recientemente aprobado por la Comunidad Andina de Naciones (CAN), sobre cuyas implicaciones en el campo de la biodiversidad tenemos en este número artículos de Manuel Ruiz, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y Margarita Flórez, abogada ambientalista colombiana.

La relación entre las disposiciones del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) y el Acuerdo sobre los ADPIC, en general, y el exámen del Artículo 27.3. b) en particular (ver recuadro pág.2), es una cuestión espinosa. Un amplio bloque de países en desarrollo considera que ambas normas se contraponen. El CDB fue firmado por 175 países en 1992 y aún no ha sido ratificado por siete países, entre ellos EE.UU, precisamente por sus implicaciones en materia de propiedad intelectual.

Mientras el Acuerdo sobre los ADPIC busca amparar el beneficio económico de los inventores como forma de promover la innovación (ver recuadro pág.3), la CDB introduce en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual sobre organismos vivos una serie de criterios relacionados con la soberanía sobre los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, la conservación de la biodiversidad y el reparto equitativo de los beneficios derivados de ésta. Estas consideraciones inciden sobre el alcance que puede tener un régimen de propiedad intelectual.

El debate ya se ha instalado en la OMC. En la última reunión del Consejo de los ADPIC realizada el 21 y 22 de septiembre, India y el Grupo Africano (apoyados por varios países en desarrollo, incluyendo a Brasil) solicitaron al Consejo que se tengan en cuenta temas tales como la biodiversidad, el conocimiento tradicional, la distribución de beneficios derivados de su explotación, los derechos de los agricultores de sembrar y compartir semillas y la ética de patentar la vida. Algunos países, como los del Grupo Africano, van más allá y buscan eliminar del Acuerdo toda referencia a los organismos vivos. Otros, como la CAN (Decisión 391 sobre acceso a recursos genéticos) y la India, buscan que la normativa permita un mayor control sobre los recursos genéticos para facilitar la participación en los beneficios de sus aplicaciones tecnológicas. Estados Unidos por su parte, prefiere concentrar el debate en cuestiones técnicas relativas a la aplicación del artículo 27.3. b).

Por lo tanto, el proceso de revisión de éste artículo ha evidenciado con claridad dos posiciones divergentes:

- La de los países ricos en biodiversidad que quieren que el artículo 27.3. b), responda a los lineamientos del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) en el sentido de que los Estados tienen derechos soberanos sobre su biodi-

*Continúa en la página 2*

Continuación de la página 1

versidad y que los beneficios que resulten de su utilización deben distribuirse de manera equitativa.

- La de EE.UU. y otros países desarrollados fuertes en la industria de la innovación (v.g. empresas de semillas, de biotecnología transgénica y empresas farmacéuticas) que quieren la consolidación de un régimen universal que proteja los derechos de propiedad intelectual (DPI) de los particulares.

### Biodiversidad y biotecnología

El interés en la cuestión se ha hecho más evidente debido al rápido desarrollo de la biotecnología, en especial de la ingeniería genética, en los países de la OCDE, y su aplicación en los campos agrícola y farmacéutico. Esto ha generado controversia sobre la patentabilidad de ciertas formas de vida, los derechos sobre los recursos genéticos y la participación en los beneficios de estas invenciones por parte de los propietarios de los recursos que, según el CDB, son los países de origen y las comunidades que se han encargado de conservar y desarrollar conocimientos a partir de esa biodiversidad.

La preocupación por los derechos de propiedad intelectual sobre organismos vivos está estrechamente ligada, particularmente en el tema de variedades vegetales, a la seguridad alimentaria dado que un manejo monóplico de la venta y distribución de semillas aumentaría la dependencia de los países ricos en biodiversidad respecto a los países ricos en innovación tecnológica. No sólo en términos económicos sino por el potencial alimentario y el valor social, cultural, ecológico y espiritual de esa biodiversidad.

### Propiedad intelectual sobre variedades vegetales

El artículo 27.3. b) obliga a los Miembros de la OMC a otorgar protección a todas las obtenciones vegetales mediante un sistema eficaz *sui generis*, patentes o una combinación de los dos. El sistema *sui generis* que los negociadores tenían en mente era el de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), cuya versión de 1991 se acerca mucho más a un sistema de patentes que la versión de 1978 y no obliga (sin prohibirlo) a los miembros a garantizar el derecho del agricultor a resembrar y compartir semillas para poder sobrevivir. Esto podría llevar a la desaparición de pequeños agricultores e implica fomentar un sistema de monocultivo y consecuente abandono de semillas tradicionales para concentrarse en unos cuantos tipo de estas, lo que inevitablemente llevaría a la pérdida de diversidad biológica y a un desaprovechamiento de sus potenciales beneficios en materia alimentaria.

El régimen de la UPOV es un sistema directamente aplicable en las legislaciones nacionales y por lo tanto, el solo hecho de ratificarlo permite a los países cumplir con las obligaciones que establece el artículo 27.3. b).

### Puntos claves del debate

El debate ADPIC-CDB involucra preocupaciones como:

- ▲ Éticas (p.ej. ¿se puede patentar la vida? ¿se puede patentar el alimento?)
- ▲ Económicas (p.ej. ¿qué tipo de distribución del poder económico favorece el régimen de propiedad intelectual? ¿cómo se distribuyen los beneficios de las aplicaciones de los recursos genéticos?)
- ▲ Sociales (p.ej. ¿qué efectos tiene la propiedad sobre semillas en las prácticas agrícolas tradicionales?, ¿cómo proteger los conocimientos tradicionales indígenas?, ¿qué impacto tienen los DPI sobre los precios de los medicamentos?)
- ▲ Ambientales (p.ej. ¿qué impacto tienen las nuevas invenciones -v.g. los OGM- sobre la variabilidad genética?)
- ▲ Políticas (p.ej. ¿quién regula el acceso a los recursos genéticos?)

Otra alternativa que defienden algunas empresas de biotecnología agrícola y que constituye un motivo de preocupación para los países en desarrollo, es la de las variedades que no se reproducen y por lo tanto no requieren acuerdos legales para evitar que los agricultores vuelvan a utilizarlas, como las que provienen de la aplicación de la tecnología 'Terminator', que ya han sido patentadas por investigadores del Reino Unido y Estados Unidos.

### Patentes sobre formas de vida

Un ingrediente más de gran relevancia dentro del debate biodiversidad-propiedad intelectual es el otorgamiento de patentes sobre secuencias de ADN, que son fragmentos de genes,

como ya ha ocurrido en EE.UU. "Esto podría provocar

### El controvertido Artículo 27.3. b)

"Los Miembros podrán excluir así mismo de la patentabilidad....b) Las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquellas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC".

El artículo 27 permite dos excepciones a la norma básica sobre patentabilidad: 1. Cuando los miembros deseen evitar la explotación comercial de la invención para proteger el orden público o la moralidad; esto incluye explícitamente las invenciones peligrosas para la salud o la vida de las personas, de los animales o de las plantas, o gravemente perjudiciales para el medio ambiente (asunto en el que también es necesario un estudio empírico sobre las relaciones entre organismos genéticamente modificados (OGM), y erosión de la biodiversidad). 2. Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.

De otra parte, el artículo 30 dice que los miembros de la OMC podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, lo cual podría permitir que se incluyan exenciones para fines de investigación y obtención.

Continúa en la página 3

*Continuación de la página 2*

que varias empresas tengan derechos de propiedad sobre distintas partes de un gen, y que sea necesario el acuerdo de todas ellas, con el posible pago de derechos, para trabajar con esos genes en los países en los que estén previstas las patentes. Ya que algunos de estos fragmentos aparecen en varias especies en las que existe una estructura común en algunos genes básicos, los poseedores de los derechos podrían tener un control muy amplio sobre la utilización de tales transgenes en la investigación y cría de animales<sup>1</sup>. Como advierte Carlos Correa de la Universidad de Buenos Aires, "el hecho de patentar genes a nivel celular amplía el ámbito de protección a todas las plantas que incluyan una célula con el gen en cuestión"<sup>2</sup>.

### **La estrategia de la dilación**

Para algunos, lo que necesitan los países ricos en biodiversidad para resolver esta disputa a su favor es tiempo. Para otros, no legislar pronto sobre este tema -estratégico para los países ubicados cerca a los trópicos- es permitir que las empresas de los países desarrollados ocupen todos los puestos antes de que empiece la partida.

Al respecto dice un estudio del Banco Mundial sobre el tema (1998): "tantas empresas de países industrializados están adquiriendo posiciones fuertes en materia de propiedad intelectual, a menudo abarcando herramientas fundamentales de investigación así como productos comercializables, que puede resultar difícil para nuevas empresas e investigadores abrirse paso en esta nueva industria mundial".

Igualmente la ausencia de una normativa clara respecto a los derechos de propiedad intelectual sobre organismos vivos ha permitido que proliferen prácticas como la biopiratería y la bioprospección desde los tiempos de la conquista hasta hoy (los dos casos que aparecen en la página 15 ilustran esta práctica.). "Históricamente la bioprospección y la biopiratería

### **La propiedad sobre organismos vivos en la OMC**

El Acuerdo sobre los ADPIC, firmado por cerca de 130 países, es uno de los tres pilares de la Organización Mundial del Comercio (OMC) - los otros dos son el comercio de mercancías y el de servicios - y es uno de los resultados más importantes de la Ronda Uruguay, que busca "la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual" y dice que estos deberán "contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones" (Art. 7).

El ADPIC recoge en gran medida la normativa internacional que ya existía sobre protección de la propiedad inte-

lectual, y le agrega dos elementos importantes: la aplicación de los principios de nación más favorecida y trato nacional, y el recurso al Mecanismo de Solución de Diferencias de la OMC.

"Al colocar los DPI en el marco de la OMC y someterlos a su procedimiento vinculante para la solución de diferencias, los defensores de un régimen más fuerte de DPI han hecho posible que los Miembros de la OMC que no cumplan sus disposiciones se enfrenten a sanciones comerciales en cualquier esfera sino logran cumplir sus normas (...) Se puede afirmar que esta es la razón principal por la que colocaron los DPI en el marco de la OMC en lugar de haberlo hecho en el organismo existente encargado de la promoción de los DPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)"<sup>3</sup>.

han sido tan importantes para la economía por ejemplo de los Estados Unidos que Warren Christopher, ex Secretario de Estado, declaró que la contribución de germoplasma de maíz extranjero a la economía de su país, era de 7 billones de dólares para 1997"<sup>4</sup>.

La CDB ha venido a llenar este vacío: a partir de su entrada en vigencia, los Estados han afirmado su soberanía sobre los recursos de la biodiversidad, por lo que la extracción de germoplasma de un país debe ser aprobada por el mismo. Algo similar ocurre con los conocimientos acumulados por comunidades indígenas y locales. Estos conocimientos han servido para identificar especies silvestres con propiedades, por ejemplo, medicinales, que luego han recibido aplicaciones industriales sin que se retribuya a las comunidades. La CDB ha abierto la puerta a que el valor económico de estos conocimientos sea reconocido.

El tema aquí abordado es ciertamente complejo y el artículo sólo pretende dar una visión general de algunas de las aristas del debate ADPIC-CDB, el cual pone de presente el desafío de conciliar el interés económico creciente de la propiedad intelectual con consideraciones ambientales y de equidad.

### **El Convenio sobre Diversidad Biológica**

La CDB busca :

"La conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de los recursos genéticos" (Art.1), reconoce los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos biológicos y genéticos (artículos 3 y 15) y exige el reparto equitativo de los beneficios procedentes del uso comercial de estos recursos y el conocimiento tradicional de las comunidades (párrafo 7 del artículo 15).

<sup>1</sup> TANSEY, Geoff. "Comercio, Propiedad Intelectual, alimentación y biodiversidad" Cuestiones clave y opciones de cara al examen del párrafo 3. b) del Artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, previsto para 1999. Quaker Peace & Service, Londres.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> "Biodiversidad, bioprospección y bioseguridad", Anamaría Varela (compiladora).

*Continúa en la página 15*

## **Decisión Andina: ¿Un paso adelante? (I)**

*La reciente Decisión 486 que establece un Régimen Común sobre Propiedad Industrial entre los países miembros de la Comunidad Andina, la cual debe entrar en vigencia a partir del próximo primero de diciembre, ha creado controversia en lo que tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual sobre los organismos vivos. A continuación les presentamos dos caras de la misma Decisión.*

### **Estableciendo sinergias entre el CDB y el régimen de propiedad industrial**

Por Manuel Ruiz M.\*

Cuáles son los impactos de los derechos de propiedad intelectual (DPI), especialmente de las patentes de invención y los derechos de obtentor, sobre los esfuerzos de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, constituye una interrogante que, desde hace varios años, es objeto de intensos debates y especulaciones en múltiples foros nacionales, regionales e internacionales.

Desde que el propio Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) incorporó en su texto referencias explícitas a los DPI (artículo 16) y reconoció que los mismos podrían tener impactos en su aplicación efectiva, se han ido perfilando estas discusiones. Si a ello se suman los contenidos normativos del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en lo referente a las patentes sobre formas de vida (artículo 27.3.b), no hacen sino acentuarse las controversias entre temas tales como: acceso a recursos genéticos, distribución equitativa de beneficios por el uso de estos recursos, transferencia de tecnologías, protección de conocimientos, innovaciones y prácticas de comunidades indígenas.

Sin embargo, en materia específica de normas jurídicas sobre DPI no se conocen hasta el momento –y salvo excepciones muy puntuales– antecedentes normativos que hubieran establecido una relación explícita y directa entre estos derechos y la diversidad biológica integrado los conceptos de ‘recursos genéticos’, ‘conocimientos tradicionales indígenas’ y ‘patrimonio biológico’ en un único texto normativo.

#### **¿Qué pretende la Decisión 486 ?**

Hay ciertamente legítimos cuestionamientos sobre los sistemas de propiedad intelectual en sí y sus impactos en las posibilidades de desarrollo científico y tecnológico de los países menos industrializados y, en particular, sobre los alcances éticos de la concesión de patentes sobre formas de vida.

El concepto de ‘biopiratería’ ciertamente refleja mucha de la tensión subyacente en las negociaciones internacionales. Sin

embargo, la Decisión 486 de la Comunidad Andina sobre un Régimen Común sobre Propiedad Industrial (aprobada el 14 de septiembre de este año) plantea una serie de elementos sumamente interesantes que permiten vislumbrar un futuro en el cual países megadiversos y tradicionalmente proveedores de material biológico que se incorpora luego en invenciones (protegidas por patentes), puedan a su vez participar en los beneficios que se deriven del acceso y uso de este material. También ofrece una posibilidad para estos países de ejercer un mayor control respecto del uso por parte de empresas farmacéuticas, biotecnológicas y agroindustriales de este material.

**La Decisión 486 permite vislumbrar un futuro en el cual países megadiversos y tradicionalmente proveedores de material biológico que se incorpora luego en invenciones (protegidas por patentes), puedan a su vez participar en los beneficios que se deriven del acceso y uso de este material**

Una vez más, –ya lo había hecho con la Decisión 391 sobre un Régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos– la Comunidad Andina se pone a la vanguardia de los avances y la innovación legislativa al haber aprobado la Decisión 486 que entrará en vigencia a partir de diciembre del 2000 y reemplazará a la Decisión 344. Innovación normativa en el campo de la relación DPI / diversidad biológica.

Esta nueva norma andina sobre propiedad industrial incorpora una serie de contenidos directamente asociados a la diversidad biológica y a la protección de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, estableciendo relaciones entre el CDB y un régimen de propiedad industrial de alcance regional que, hasta hace poco y en círculos políticos y de negociación internacional, parecían muy complicadas y poco viables.

En esencia, la Decisión 486 y sus normas sobre patentes de invención, están reconociendo explícitamente y en diversas instancias, que pueden generarse impactos en su aplicación sobre la diversidad biológica y que, sin embargo, pueden promoverse también ciertas sinergias entre las normas sobre diversidad biológica y sobre conocimientos de las comunidades indígenas con el sistema de propiedad intelectual.

#### **Contenido normativo**

Como cuestión única en una norma sub-regional sobre propiedad industrial, el artículo 3 de la Decisión 486 (Del Patri-

\* Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

*Continuación de la página 4*

monio Biológico y Genético y de los Conocimientos Tradicionales) establece que "... los Países Miembros asegurarán que la protección conferida a los elementos de la propiedad industrial se concederá salvaguardando y respetando su patrimonio biológico y genético, así como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas, afro-americanas o locales. En tal virtud, la concesión de patentes que versen sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos estará supeditada a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico internacional, comunitario y nacional". Es decir, la concesión de derechos o protección a través de, por ejemplo, patentes de invención o incluso derechos de obtentor, no puede (o no debe) afectar intereses respecto al patrimonio biológico de los Países Miembros y el conocimiento tradicional de sus comunidades.

Seguidamente este mismo artículo señala que "...los Países Miembros reconocen el derecho y la facultad para decidir de las comunidades indígenas, afro-americanas o locales, sobre sus conocimientos colectivos". Lo cual explícitamente implica un reconocimiento de los Gobiernos del aporte intelectual indígena y para lo cual eventualmente deberán desarrollarse mecanismos de protección.

Por último, el artículo 3 señala que "...las disposiciones de la presente Decisión se aplicarán e interpretarán de manera que no contravengan a las establecidas por la Decisión 391, con sus modificaciones vigentes". En este sentido, se hace la vinculación directa entre el sistema de patentes y el régimen de acceso a los recursos genéticos, pues muchas de estas patentes especialmente a nivel biotecnológico, pueden derivarse directa o indirectamente de recursos genéticos de los cuales los Países Miembros son países de origen.

Dentro de lo que la Decisión 486 no considerará invenciones, el artículo 15 (b) incluye, entre otros "... el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural". La referencia a un 'ser vivo natural' es interesante pues indicaría que en su aplicación, sí sería patentables el genoma o germoplasma de seres vivos no-naturales, es decir, respecto de los cuales pudiese haber intervenido el hombre a través de técnicas biotecnológicas.

Retornando al punto sobre la vinculación entre el sistema de acceso a recursos y el régimen de patentes, el artículo 26 de esta Decisión establece que "...la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: [...] (h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o

procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen".

Pero va incluso más allá en el párrafo (i) en el cual se establece que "... de ser el caso [la solicitud deberá contener] , la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afro-americanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes". Es decir, se requiere del consentimiento de las comunidades y del documento que lo acredite, cuando se pretenda patentar una invención que a su vez pueda derivarse directa o indirectamente de sus conocimientos.

Otro de los puntos interesantes a resaltar es el hecho que, de conformidad con el artículo 75, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual

podrá decretar de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de una patente, cuando "... (g) de ser el caso, no se hubiere presentado la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen" y "(h) de ser el caso, no se hubiere presentado la copia

del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procesos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen..."

Existe, por lo tanto, la posibilidad de que terceros puedan cuestionar el otorgamiento de un título de patente en función a los supuestos anteriormente señalados y de ser confirmados, lograr que se declare la nulidad del título.

#### **Comentario final**

En resumen, los mecanismos propuestos por la Decisión 486 podrían servir para promover que los principios generales del CDB sobre acceso y distribución de beneficios y el respeto a los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas, sean efectivamente tomados en cuenta en la aplicación de los sistemas de propiedad intelectual y coadyuven a la búsqueda de mecanismos que permitan compatibilizar los DPI con el CDB.

**La referencia a un 'ser vivo natural' es interesante pues indicaría que en su aplicación, sí serían patentables el genoma o el germoplasma de seres vivos no-naturales**

## **Decisión Andina: ¿Un paso adelante? (II)**

### **Un reto a la capacidad de invención**

Por Margarita Flórez\*

La polémica sobre el patentamiento de materia viva, tal como existe en la naturaleza ha vuelto a agudizarse a raíz de la Disposición Transitoria Segunda de la Decisión Andina 486 sobre Propiedad Industrial, según la cual "Los microorganismos serán patentables hasta tanto se adopten medidas distintas resultantes de la revisión del artículo 27.3. b) del Acuerdo sobre los ADPIC. A tal efecto, se tendrán en cuenta los compromisos asumidos por los Países Miembros en el ámbito del Convenio sobre la Diversidad Biológica".

Respecto de esa norma, tenemos algunas dudas:

- La primera tiene que ver con la posible contradicción que se presenta cuando en el mismo texto legal, de un lado se excluye de la patentabilidad a los animales y a las plantas, acogiendo la tesis de que la materia viva que se encuentra en la naturaleza no puede considerarse una invención, pero al mismo tiempo se admite el patentamiento sobre microorganismos, aún si se pretende que esta disposición tenga una duración transitoria al condicionarlo a la adopción de medidas diferentes resultantes de la revisión del artículo 27.3. b) del ADPIC. La exclusión tiene los mismos fundamentos en cuanto se trata de materia viva; el principal es que la materia encontrada en la naturaleza no puede considerarse como una invención, presupuesto de la patente.
- La segunda, es la relativa a qué se entiende por microorganismo, puesto que no está definido, y sin embargo se puede patentar. Esta ausencia de definición sobre lo que considera microorganismo, y la consiguiente falta de precisión podrían borrar las fronteras de las objeciones que puedan presentarse, y tornar buena parte del material genético dentro de esta categoría.
- De otra parte, si bien es cierto que la Decisión 486 prevé que se proteja el Patrimonio Biológico y Genético, no es menos cierto que precisamente en el caso de los microorganismos, éstos hacen parte del patrimonio genético de un país y por lo tanto son inembargables, imprescriptibles e inalienables. Y estas características podrían verse desconocidas con la posibilidad de su patentamiento, por lo tanto habría que aclarar en la práctica cuál es el alcance del primer aparte del artículo cuando expresa que " Los Países Miembros asegurarán que la protección conferida a los elementos de la propiedad industrial

se concederá salvaguardando y respetando su patrimonio biológico y genético".

- De igual manera, en la práctica la protección concreta y real de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, no se logra con base en declaraciones. Cuando el mismo artículo 3, prescribe que "En tal virtud, la concesión de patentes que versen sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos estará supeditada a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico internacional, comunitario y nacional". Este es un reconocimiento a unos derechos que todavía no poseen un cuerpo de igual efectividad para oponer a los derechos de propiedad intelectual

---

**...la Decisión 486 es una adecuación de los regímenes de propiedad intelectual más allá de los ADPIC, sin que se haya avanzado en su discusión multilateral**

---

- En el fondo lo que encontramos en la Decisión 486 es una adecuación de los regímenes de propiedad intelectual más allá de los ADPIC, sin que se haya avanzado en su discusión multilateral, y cuando diversos países en desarrollo han expresado su inconformidad por la ausencia de los beneficios que prometieron acompañarían al Acuerdo.

- Respecto de los conflictos advertidos en el texto del Convenio sobre Diversidad Biológica tampoco vemos que se haya armonizado ninguna de las materias contenciosas, y sin embargo, como en el caso de un recurso genético, los microorganismos, se permite su patentamiento. La prueba de que este es un asunto sujeto a negociación, se encuentra en el texto mismo de la disposición transitoria segunda cuando advierte que éste patentamiento puede variarse en caso de que se resuelva algo diferente.

Uno podría preguntarles, si no era mejor esperar precisamente esa renegociación, y asegurar beneficios en el campo de transferencia de tecnología, para comenzar entonces la discusión sobre el patentamiento de recursos biológicos y genéticos.

En opinión de algunos tratadistas, es el mismo sistema de patentes, que en su afán de monopolizar lo existente desvirtúa su esencia, que es el estímulo a la inventiva humana. Para los ambientalistas, a casi ocho años de Río, son pocos los datos concretos y precisos que nos llegan sobre las ventajas de nuestra diversidad y sí, en cambio, son numerosas las señales que recibimos sobre el estrecho campo que nos queda.

\* Abogada ambientalista, Directora del Centro de Debate y Acción Ambiental.

## Fortaleciendo posiciones con miras a una nueva ronda

*Las propuestas de reducción de los subsidios a las exportaciones agrícolas por parte de la Unión Europea siguen despertando escepticismo entre los integrantes del Grupo Cairns y varios países en desarrollo a medida que se acerca la fecha de expiración de la cláusula de paz en el 2003. Por otra parte, el avance en temas cruciales como la revisión de la aplicación de acuerdos está estancado, posiblemente a la espera de una nueva ronda de negociaciones multilaterales.*

### Subsidios agrícolas

La tercera sesión especial del Comité de Agricultura, realizada el 28 y 29 de septiembre, muestra que los objetivos de los países en las negociaciones se mantienen tan divergentes como siempre.

El Grupo Cairns<sup>1</sup> mostró un predecible escepticismo frente a la presentación de la UE sobre competencia en exportaciones (G/AG/NG/W/34), en la cual se condicionan las reducciones a los subsidios a las exportaciones a concesiones que se hagan en otras formas de apoyo a éstas, como los créditos, la asistencia alimentaria y las empresas comerciales estatales; consideradas prácticas distorsivas del comercio.

Según el Grupo Cairns, ni las garantías a las exportaciones de EE.UU., ni las juntas de comercialización para productos de la leche y cereales de Australia y Canadá (esta última severamente cuestionada por EE.UU. que ha iniciado una nueva investigación para determinar si la junta incurre en prácticas desleales) se acercan a los niveles de distorsión causados por los subsidios a la exportación de la UE.

La UE también recibió fuertes reacciones a su propuesta sobre 'bienestar de los animales' (G/AG/NG/W/19). En este documento se sugiere, entre otras cosas, que la OMC autorice alguna forma de compensación por los costos de producción adicionales generados por los altos estándares de protección a los animales. Frente a ello, la Argentina señaló que, al contrario de la propuesta Europea, la posición del Grupo Cairns busca el 'bienestar humano' de los países en desarrollo cuya producción agrícola es puesta en peligro por los subsidios, así como el bienestar de los países exportadores netos que son desalojados de los mercados con demandas solventes. Funcionarios de la UE expresaron que estos comentarios se basaban en lecturas incompletas de la propuesta.

El Grupo Cairns presentó un documento sobre apoyo interno (G/AG/NG/W/35), en el que propone una fórmula que llevaría a la eliminación de la caja azul. La fórmula incluiría una reducción inicial de al menos 50% en los apoyos internos distorsivos del comercio y la producción, durante el primer año. En anteriores presentaciones, el Grupo exigía la eliminación total de los subsidios a la exportación.

Además los países del Mercosur, junto con Chile, Bolivia y Costa Rica, presentaron un documento (G/AG/NG/W/38) en

el que rechazan el 'mito' de que los subsidios a la exportación son necesarios para mantener la seguridad alimentaria en países en desarrollo importadores netos de alimentos. El documento de tres páginas concluye que "la liberalización del comercio agrícola y la consecuente eliminación de los subsidios a la exportación son la solución real a la seguridad alimentaria", agregando que los países deberían aplicar la Decisión sobre Medidas Relativas a los Posibles Efectos Negativos del Programa de Reformas sobre Países Menos Desarrollados y Países en Desarrollo Importadores Netos de Alimentos, y proveer asistencia alimentaria a los países que la necesitan "sin condiciones comerciales y de forma totalmente gratuita".

**Si la cláusula de paz no se extiende –cosa que no ocurrirá si no se registran avances significativos en las negociaciones– los subsidios internos y a la exportación estarían abiertos a planteamientos a partir de enero de 2004**

No se ha establecido fecha para la finalización de las conversaciones, pero los negociadores son conscientes de las consecuencias potencialmente dañinas de la expiración de la cláusula de paz en el 2003. En esta cláusula, los Miembros acordaron abstenerse de iniciar procedimientos de solución de controversias sobre subsidios agrícolas por un período de nueve años desde 1995. Si la disposición no se extiende –cosa que no ocurrirá si no se registran

avances significativos en las negociaciones– los subsidios internos y a la exportación de los Miembros estarían abiertos a planteamientos a partir de enero de 2004.

La cuarta sesión especial se realizará del 15 al 17 de noviembre, y los Miembros tienen la posibilidad de programar otra reunión en enero del 2001 antes de concluir la Fase I en marzo del 2001. Se espera que entonces adopten un nuevo programa de trabajo estableciendo los tiempos para presentar propuestas concretas que indiquen las reducciones efectivas que están dispuestos a hacer a las barreras al comercio agrícola. Una vez que estas se conozcan, las negociaciones reales podrán finalmente comenzar.

Paralelamente, varias organizaciones no gubernamentales internacionales buscan alianzas con países en desarrollo, en particular los no exportadores agrícolas, para plantear con más fuerza ciertos temas que en las discusiones aparecen soslayados. En una conferencia celebrada en Ginebra del 26 al 27 de octubre, un grupo de ONG y países en desarrollo plantearon la necesidad de ampliar el mandato del Artículo 20 del

<sup>1</sup> Australia, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Fiji, Filipinas, Guatemala, Indonesia, Malasia, Nueva Zelandia, Paraguay, Sudáfrica, Tailandia y Uruguay.

*Continuación de la página 7*

Acuerdo sobre Agricultura para incluir entre los temas de discusión los efectos del *dumping*, la seguridad alimentaria y el papel de las multinacionales en el comercio mundial de alimentos.

#### **Aplicación de acuerdos: silencios elocuentes**

En la sesión especial del Consejo General del pasado 18 de octubre se vio un inicio poco dinámico de la segunda fase de la revisión de la aplicación de acuerdos.

La falta de progreso se debería en parte a que muchos Miembros son reticentes a discutir asuntos específicos dado que algunas de las cuestiones de aplicación de acuerdos podrían utilizarse como fichas de intercambio en caso de una nueva ronda de negociaciones. Algunos Miembros también podrían estar interesados en extender la revisión para prevenir el lanzamiento de nuevas negociaciones de liberalización o, al menos, obtener un 'adelanto' en la forma de concesiones en materia de aplicación de acuerdos a cambio de apoyar una nueva ronda.

La revisión busca abordar las preocupaciones de los países en desarrollo sobre los desequilibrios existentes en los Acuerdos de la OMC señalados en los párrafos 21 y 22 del borrador de Declaración Ministerial de octubre de 1999 (disponible en [www.ictsd.org/English/Declaration3.rtf](http://www.ictsd.org/English/Declaration3.rtf)). Estos párrafos no sólo proponen cambios en la aplicación de un gran número de acuerdos existentes, sino que también implican re-escribir algunas de las disposiciones para hacerlas más sensibles a las necesidades de los países en desarrollo. El objetivo de la revisión es "evaluar las dificultades existentes, identificar formas de resolverlas y decidir sobre acciones adecuadas".

El resultado más interesante de la sesión de octubre fue el documento presentado por el presidente del Consejo, el Embajador Bryn. Este texto de nueve páginas es una indicación de lo que las sesiones formales y las consultas informales han logrado a la fecha, haciendo énfasis en que no es un texto negociado ni pretende representar un consenso en todos los temas.

El documento está organizado de acuerdo a las áreas temáticas que parecen ofrecer las mejores perspectivas de progreso, aunque la estructura no implica que otras propuestas hechas en el párrafo 21 hayan sido abandonadas o ignoradas. No obstante, los temas omitidos en el documento –que presumiblemente indica perspectivas desfavorables para actuar sobre los mismos– son más interesantes que los que están incluidos.

Dos temas particularmente apremiantes para los países en desarrollo están notoriamente ausentes de la evaluación de Bryn: anti-*dumping* y textiles. Ambos están listados para discusiones futuras según el párrafo 22, a pesar de que figuran prominentemente en las propuestas del párrafo 21 para acción inmediata; de hecho, todas las propuestas sobre textiles

fueron agrupadas en el párrafo 21. Las propuestas específicas relacionadas con ambos temas fueron discutidas en la sesión de septiembre, y su omisión en el documento de Bryn sin duda refleja la reticencia de los países desarrollados de hacer concesiones en estas áreas.

De igual forma, el documento calla sobre las extensiones de los períodos de transición para países en desarrollo, aunque el párrafo 21 propone una extensión general de las fechas límite en los Acuerdos sobre inversiones y sobre propiedad intelectual. Las extensiones en el acuerdo sobre inversiones están siendo revisadas caso por caso en el Consejo de Comercio de Mercancías, y las extensiones en el acuerdo sobre propiedad intelectual aún no se discuten. Mientras tanto, EE.UU. y la UE han iniciado disputas contra India y Filipinas en relación a inversiones, y EE.UU. ha desafiado a Argentina y Brasil en relación a patentes farmacéuticas.

Los productos de la revisión se perfilan magros, al menos hasta la fecha límite establecida para el 19 de diciembre. Al listar las áreas donde se ha registrado progreso o éste parece posible, el documento menciona potenciales acciones para aliviar las dificultades de los países en desarrollo respecto al Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el Acuerdo sobre Barreras Técnicas al Comercio. Las medidas podrían incluir el asegurar una mejor representación de los países en desarrollo en organizaciones internacionales que definen estándares y un período de 12 meses para cumplir con las nuevas medidas. Bryn señala, no obstante, que "algunas delegaciones han indicado que necesitan considerar este asunto en mayor profundidad".

El documento menciona la posibilidad de una administración más transparente de las cuotas arancelarias en agricultura y procedimientos más simples de evaluación, así como el establecimiento de una fecha límite a finales de 2001 para completar la armonización de las normas de origen.

Entre las áreas en las que se podrían obtener resultados se encuentran los cambios en los límites de ingreso por debajo de los cuales los países en desarrollo podrían proveer subsidios a las exportaciones industriales, y el libre tránsito de proveedores de servicios.

Sobre derechos de propiedad intelectual, pareciera que la revisión solo llevará al Consejo General a incitar al Consejo del ADPIC a 'continuar su trabajo en la clarificación de las relaciones entre el ADPIC y el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB)', a que considere positivamente la concesión de estatus de observador a la Secretaría de la CDB, y a abstenerse en los casos de reclamaciones sin infracción hasta que el Consejo haya completado las discusiones sobre este tema. En cuanto a la transferencia de tecnología, la discusión se centra en la elaboración de una lista ilustrativa de incentivos y mejores procedimientos de notificación y seguimiento para estas medidas.

*Continúa en la página 9*



*Continuación de la página 8*

## **Transparencia externa: las propuestas cobran fuerza**

Los Miembros de la OMC continúan discutiendo, con cierta incomodidad, la cuestión de la 'transparencia externa' o el papel de los actores no gubernamentales en el funcionamiento del sistema multilateral de comercio. La memoria de las manifestaciones en Seattle está aún viva, lo que endurece la resistencia de muchos gobiernos a lo que llaman la 'sociedad incivil'. Otros gobiernos, y los EE.UU. en particular, han tomado la posición opuesta: Seattle demostró que se necesita más transparencia para mantener el apoyo del público para el sistema de comercio actual y las futuras liberalizaciones.

Cinco gobiernos presentaron propuestas sobre transparencia externa en la sesión ordinaria del Consejo General del 10 de octubre. Si bien no se discutieron en detalle, proveen una buena muestra de la diversidad de perspectivas de los distintos gobiernos.

El documento presentado por EE.UU. (WT/GC/W/413/Rev.1), entre otras sugerencias menos controvertidas, propone que la OMC abra algunas de las sesiones del consejo y los comités de manera experimental (incluyendo la transmisión por internet de al menos algunas reuniones del Órgano de Revisión de la Política Comercial), y que asegure que las presentaciones de todas las partes a paneles de solución de diferencias y al Órgano de Apelaciones se hagan públicas, desarrollando un mecanismo para permitir a los interesados no gubernamentales la presentación de sus puntos de vista en las disputas, y permitiendo que el público observe los procedimientos de paneles y apelaciones de la OMC.

Los países en desarrollo, así como Australia y Japón han criticado las decisiones que afirman el derecho – pero no la obligación – de los paneles y el Órgano de Apelaciones de considerar presentaciones espontáneas hechas por ONG. Su oposición a la presencia de observadores de organizaciones de la sociedad civil en las reuniones de la OMC, y en particular en las audiencias sobre solución de diferencias, es más fuerte aún. Muchos también objetan airadamente la divulgación de las presentaciones de los gobiernos en disputas, citando su naturaleza confidencial y el carácter gubernamental de la OMC.

Otras propuestas de EE.UU. fueron secundadas en documentos presentados por la UE y Canadá. La propuesta de la UE (WT/GC/W/412) se concentra principalmente en aumentar la transparencia interna, aunque propone también mejorar el acceso del público al sistema comercial a través de: la desrestricción inmediata de la mayoría de los documentos de la OMC, el aumento de los contactos entre ONG y los Miembros a través de simposios, la apertura voluntaria de las reuniones de revisión de la política comercial a parlamentarios, y la realización de una reunión abierta anual de la OMC jun-

to a una reunión de parlamentarios de los Miembros de la OMC. Adicionalmente, la UE propuso revisar los lineamientos existentes para la interacción entre la OMC y la sociedad civil y explorar sistemas de acreditación para ONG.

Canadá presentó propuestas sobre 'des-restricción' de documentos y actividades de la Secretaría en el mismo sentido. El documento (WT/GC/W/415) también resalta la práctica canadiense de hacer públicas sus presentaciones en procesos de solución de diferencias a solicitud de interesados, y llamó a los otros gobiernos a hacer lo mismo. Adicionalmente, Canadá solicitó autorización para transmitir por internet sus propias revisiones de política de comercio a partir de diciembre, pero no abogó por hacer de esta una práctica corriente. La mayoría de los Miembros se mostraron reticentes a la iniciativa canadiense, citando la posible erosión de la naturaleza intergubernamental de las deliberaciones en la OMC, así como el efecto potencialmente restrictivo que las cámaras podrían tener sobre las intervenciones de los Miembros.

Colombia, por su parte, realizó una declaración informal en la que enfatizó que la falta de transparencia externa no ha sido un 'elemento central' en la 'lamentable pérdida de credi-

bilidad de la OMC'. Sin embargo, tratándose de un país en desarrollo, Colombia apoya una política de 'des-restricción' de documentos inusualmente liberal, llamando a la 'supresión de los documentos restringidos, a excepción de aquellos que son necesariamente confidenciales en materia de solución de diferencias'. Adicionalmente, Colombia indicó que la participación de observadores que tengan un vínculo temático claro con los temas a tratar en las reuniones formales, es necesario, pero llamó a una clara definición del pa-

papel de estos observadores. Los Miembros dispuestos a abrir un área mayor de participación a no-Miembros deberían, sin embargo, hacerlo a nivel nacional.

La posición de Australia desilusionó a los promotores de un sistema multilateral más transparente. Este país argumenta que si bien cada Miembro es libre de diseñar sus procedimientos nacionales, los procesos de la OMC no requieren cambios radicales (WT/GC/W/414). A lo sumo, una diseminación más rápida de los documentos sería 'deseable'. Australia advierte que la transparencia externa no debe llevar a que los actores no gubernamentales adquieran 'derechos/acceso al sistema de solución de diferencias superiores a los de los gobiernos Miembros'. La aceptación de presentaciones espontáneas podría conferir tales derechos superiores a las ONG, según Australia. Este país también se opone a abrir/transmitir las reuniones, en parte por razones logísticas, y en parte porque el acceso abierto a través de internet cambiaría la naturaleza y la dinámica de las discusiones en las sesiones formales. Inevitablemente, dice Australia, se haría un mayor uso de las consultas informales, con el riesgo de que las reuniones informales se vuelvan menos relevantes para la toma de decisiones en la OMC.

*Continúa en la página 14*

**Banano: propuesta de la UE vuelve a generar resistencias**

El pasado 9 de octubre los ministros de relaciones exteriores de la Unión Europea aprobaron la última propuesta de la Comisión Europea para reformar el régimen de importación de banano, que ha sido condenado por la OMC en reiteradas oportunidades. La propuesta establecería un régimen transitorio de contingentes arancelarios de tres niveles, a ser administrado por orden de solicitud. Los contingentes serían reemplazados por un arancel uniforme en el 2006.

La Comisión propone establecer dos cuotas por un total de 2.8 millones de toneladas a un arancel de 75 ecus por tonelada, y una tercera cuota de 850.000 toneladas con un arancel de 300 ecus. Todas las cuotas estarían abiertas a todos los proveedores independientemente del país de origen, pero el banano de los países del ACP entraría sin cargo. El ACP comprende a los 71 países en desarrollo de África, el Caribe y el Pacífico signatarios de la expirada Convención de Lomé. Los exportadores latinoamericanos se niegan a considerar una autorización de la OMC para el nuevo Acuerdo de Asociación entre la UE y el ACP mientras no se solucione la cuestión del banano.

La gestión de los contingentes arancelarios por orden de solicitud se adoptó luego de que los productores bananeros no pudieron acordar una base para la distribución de las licencias de importación según volúmenes comerciados en el pasado. En el nuevo sistema, las licencias de importación se concederían semanal o quincenalmente a los operadores cuyos embarques lleguen primero a los puertos de la UE.

Si bien los países de la UE difieren sobre el reemplazo automático de este sistema por uno de arancel uniforme en el 2006, el Consejo de Ministros le dio luz verde a la Comisión para comenzar las negociaciones de arancelización en la OMC. Se espera que la UE intente fijar ese arancel en 300 ecus la tonelada, para proteger el acceso al mercado del banano ACP una vez esté desmantelado el sistema de cuotas, nivel que difícilmente será aceptado por los demás exportadores de banano.

Ecuador, el mayor exportador de banano del mundo, es el único país en disputa que ha aceptado esta propuesta pero con condiciones. Este país buscará acelerar el proceso de arancelización, ya que sus productores confían que tienen una ventaja considerable sobre los demás. Ecuador puede vender la caja de banano por US\$2.18, en tanto que el costo en Colombia es de US\$4 y en Costa Rica de US\$5.

Los demás países productores de América Latina y EE.UU. (sede de las compañías bananeras más importantes que operan en esos países) se han pronunciado en contra de la propuesta. Representantes de estos gobiernos unificaron sus posiciones frente a la misma en una reunión reciente. El argumento de EE.UU. es que el sistema propuesto seguiría

violando el Artículo XIII del GATT sobre administración no discriminatoria de restricciones cuantitativas dado que daría a los países ACP una preferencia en la asignación de cuotas y les permitiría exportar toda su producción, mientras que los países latinoamericanos se verían restringidos. La propuesta, además, beneficiaría a las compañías europeas de comercialización, que compiten con los distribuidores norteamericanos.

Por su parte los países ACP se muestran escépticos frente a la propuesta. La Asociación de Exportadores de Banano del Caribe argumenta que incluso una preferencia arancelaria alta no les garantizaría acceso al mercado y demandan que se mantengan por al menos otros diez años las cuotas arancelarias asignadas sobre la base de los flujos comerciales tradicionales. La implementación de esta propuesta llevaría al colapso total de la industria bananera del Caribe, según la Asociación.

EE.UU. y Ecuador están presionando para que se solucione rápido este problema. A menos que la Comisión realice una propuesta aceptable, EE.UU. ha expresado que a mediados de noviembre cambiará la lista de bienes de la UE afectados por los US\$191.4 millones en sanciones comerciales, como lo manda la legislación 'carrousel' adoptada en mayo. Ecuador, por su parte, podría suspender concesiones a la UE en el marco del ADPIC por US\$201.6 millones. Este país anunció en el OSD, que podría solicitar un nuevo panel para que decida sobre la obligación de la UE de reparar el daño, así como sobre la ilegalidad del trato favorable al banano de la ACP.

**Pez espada a un panel**

Cuando parecía que Chile y la UE pondrían paños fríos a su disputa en torno al pez espada, ésta última decidió solicitar formalmente el pasado 7 de noviembre el establecimiento de un panel en la OMC. Chile ha planteado un proceso de solución de disputas ante la Convención sobre el Derecho del Mar, generándose así un potencial conflicto de competencias.

El conflicto gira en torno a la sobrepesca de la especie y la prohibición chilena a los buques españoles que operan en las adyacencias de su zona económica exclusiva (ZEE) de desembarcar su captura en puertos de su jurisdicción. Chile ha promovido además la firma de un acuerdo en el marco de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (Chile, Perú, Ecuador y Colombia) que fortalece su posición de tener mayor control sobre la explotación de las especies que, como el pez espada, entran y salen de la ZEE. La incorporación de la UE a este tratado se baraja como una alternativa para solucionar el conflicto.

Mientras tanto, en el Parlamento Europeo se ha lanzado una iniciativa en contra de este acuerdo. El presidente de la Comisión de Pesca y un eurodiputado español han solicitado a la Comisión Europea que actúe para frenar los efectos del mismo, tildándolo de violatorio del Derecho del Mar "con la excusa de

## **COP-6 sobre Cambios Climáticos**

El XIII Período de sesiones del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico se realizó del 11 al 15 de septiembre en Lyon, Francia, en el marco de preparación para la VI Conferencia de las Partes (COP-6) de la Convención Marco sobre Cambios Climáticos (CMCC) de la Naciones Unidas que se realiza a mediados de noviembre en La Haya. Se espera que la COP-6 concluya las discusiones en torno al Protocolo de Kioto -que fue adoptado en 1997 con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero- y las discusiones que comenzaron en la COP-4 en 1998, durante las cuales se desarrolló el Plan de Acción de Buenos Aires para preparar la entrada en vigencia del Protocolo de Kioto.

La CMCC entró en vigencia en 1994 y pretende prevenir los posibles impactos negativos del cambio climático.

En Lyon, algunas de las principales discusiones en torno al Protocolo de Kioto fueron:

**Mecanismos.** La selección de tecnologías para incluirlas bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) generó discrepancias. Algunos países quieren limitarse a la inclusión de tecnologías de energía renovable y de demanda, mientras la inclusión de tecnologías de energía nuclear dividió a los países de la UE. Tampoco se llegó a un acuerdo sobre la inclusión de los sumideros de carbono bajo este mecanismo.

Un tema importante sobre los mecanismos que tampoco se logró resolver es el del establecimiento de un nivel mínimo de reducción de emisiones que cada gobierno deberá poner en marcha a través de medidas nacionales. La UE y sus aliados quieren que los países alcancen por lo menos el 50% de la reducción de sus emisiones a través de medidas nacionales y el resto a través de otros mecanismos (p.ej. Implementación Conjunta, MDL, comercio de emisiones).

Por su parte el Grupo 'Paraguas' (EE.UU., Australia, Canadá, Noruega, Nueva Zelanda y Rusia) rechaza el establecimiento de límites cuantitativos dentro de los mecanismos flexibles y los países en desarrollo se encuentran divididos entre estas dos posiciones.

**Uso del suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura** (LULUCF, por sus siglas en inglés). Se logró desarrollar borradores de textos sobre los Artículos 3.3 (aforestación, reforestación y deforestación) y 3.4 (actividades adicionales). Por otra parte, varias ONG han criticado una propuesta de EE.UU. y otros países que permitiría solicitar créditos de emisiones por actividades que existen desde hace varios años.

**Cumplimiento del Protocolo.** Se avanzó mucho en el desarrollo de un borrador de texto sobre cumplimiento, tanto en términos de observancia/cumplimiento como de facilitación.

Sin embargo, quedó pendiente el alcance de la aplicación del sistema de cumplimiento de los compromisos establecidos en el Protocolo. Tampoco se lograron resolver los puntos sobre la obligatoriedad de los compromisos y el sistema de penalización, y la diferenciación en la aplicación del sistema de cumplimiento entre los países del Anexo I (países industrializados) y II (países en desarrollo y en transición).

En la COP-6 de La Haya se definirá: si el Protocolo de Kioto entra en vigencia en el 2002; los nuevos lineamientos sobre informes de emisión por parte de los países desarrollados; la manera más adecuada de manejar el desarrollo y la transferencia de tecnologías; y las necesidades de capacitación para los países en desarrollo y en transición. Actualmente 29 países han ratificado el Protocolo de Kioto. Para que el Protocolo entre en vigencia se necesita la ratificación de 55 países Miembros de la CMCC, incluyendo a países del Anexo I que representan por lo menos el 55% de toda la emisión de dióxido de carbono en 1990.

*Para mayor información, visitar la página web de la Convención: [www.unfccc.de](http://www.unfccc.de), o contacte a la Secretaría, tel: (49-228) 815-1000, fax: 815-1999, e-mail: [secretariat@unfccc.de](mailto:secretariat@unfccc.de)*

## **Convenio de Basilea sobre movimientos transfronterizos de desechos peligrosos**

El XVII Período de sesiones del Grupo de Trabajo Técnico del Convenio de Basilea se realizó del 9 al 11 de octubre en Ginebra, seguido del I Período de sesiones del Grupo de Trabajo Jurídico el 12 y 13 de octubre. El Convenio de Basilea sobre el Control de Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación fue adoptado en 1989 después de que una serie de descargas tóxicas de países industrializados atrajera la atención pública de los países en desarrollo y del Este europeo. El Convenio, que pretende formular una solución global para el manejo de desechos tóxicos, entró en vigencia en 1992 y actualmente cuenta con 141 países miembros.

Las reuniones de ambos Grupos de Trabajo contaron con la participación de representantes de los países miembros, de los países no miembros (como EE.UU. y la República Democrática de Corea), de agencias especializadas y organizaciones intergubernamentales (UNCTAD, OMC, Organización Marítima Internacional, Organización Internacional del Trabajo y la Liga de Estados Árabes). También participaron representantes de varias organizaciones no gubernamentales y del sector privado como la Asociación europea de fabricantes de plásticos, Basel Action Network, la Asociación de la industria química brasileña y la Oficina internacional de reciclaje, entre otros.

La reunión del Grupo de Trabajo Técnico se enfocó en el desarrollo de lineamientos sobre temas como el desmantelamiento ambientalmente seguro de barcos, el manejo sostenible de desechos tóxicos y la cooperación entre la Secre-

*Continúa en la página 12*

taría del Convenio y otras organizaciones internacionales. También se discutió la relación del Convenio con el propuesto convenio sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), los cambios de categoría de ciertos desechos del Anexo VIII (tóxicos) al Anexo IX (no tóxicos) y los avances en la investigación sobre las características tóxicas de los desechos.

El tema más debatido fue el del desmantelamiento de barcos que contienen en o dentro de su estructura ciertos desechos tóxicos, según los lineamientos presentados por Noruega con la ayuda de los Países Bajos e India. Las preocupaciones se centraron en los riesgos que implica para la seguridad y la salud laboral el proceso de desmantelamiento y el papel de la Organización Internacional de Trabajo en el desarrollo de estos lineamientos.

En cuanto al tema de los desechos plásticos y su eliminación, los Miembros no adoptaron lineamientos sobre su manejo debido a discrepancias sobre cómo referenciar el manejo de los PVC. Durante la reunión circuló un documento verde (*Green Document*) de la Comisión Europea sobre los asuntos ambientales relacionados con el PVC que los Miembros considerarán para avanzar en las discusiones sobre este tema en la próxima reunión del Grupo de Trabajo Técnico. De otro lado, Brasil presentó su trabajo sobre los lineamientos del manejo de desechos de plomo provenientes de baterías y se discutió sobre las diferentes alternativas tecnológicas para procesar baterías usadas.

El GRULAC (Grupo de delegados de los países de América Latina y el Caribe) subrayó su preocupación por el incremento de solicitudes, en su mayoría de países desarrollados, para cambiar de categoría a ciertos desechos de tóxicos a no tóxicos y señaló que esto tendría un impacto negativo sobre el movimiento transfronterizo dadas las dificultades de ejercer un control adecuado de estos desechos en la región.

Por su lado, la reunión del Grupo de Trabajo Jurídico no generó discusiones de fondo. Durante la apertura de la sesión de trabajo, se presentó a la nueva Presidente de este Grupo, Mariann Karcza de Hungría, y se informó a los Miembros que el Protocolo de Responsabilidad y Compensación, que se adoptó en la V Conferencia de las Partes (CdP) en diciembre de 1999, está abierta para su firma desde marzo del presente año y solamente tres países la han firmado.

El Protocolo da un marco sobre la responsabilidad y la compensación adecuada por daños resultantes del movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, incluyendo aquellos incidentes ocurridos por el tráfico ilegal de los mismos.

La tarea principal del Grupo de Trabajo Jurídico durante esta sesión fue el de revisar el desarrollo de varios lineamientos jurídicos, como los de la prevención y el control del comercio ilegal de desechos tóxicos por parte de los gobiernos. El comercio ilegal incluye la mezcla de desechos tóxicos y no tóxicos, el lavado de dinero, el comercio ilegal de

armas o la búsqueda de puertos donde no hay suficiente control y pueden botar estos desechos.

El Grupo discutió, entre otras cosas, la necesidad de capacitar a personal de control de aduanas y autoridades portuarias; los mecanismos de control sobre la aplicación del Convenio por parte de los gobiernos. En relación a este tema, los Miembros rechazaron una propuesta que hubiera permitido a las ONG e individuos denunciar la potencial no aplicación del Convenio por parte de gobiernos; sin embargo, se acordó que se debe crear un órgano para administrar el mecanismo de control, el mismo que serviría para ayudar a los países a aplicar el Convenio.

*Para mayor información, visite la página web del Convenio: [www.basel.int](http://www.basel.int), o contacte a la Secretaría, tel: (41-22) 917-8242, fax: 797-3464. Para otras fuentes de información visite las páginas web de: Basel Action Network, [www.ban.org](http://www.ban.org) y el Centro regional del Convenio de Basilea en Montevideo, [www.rcctt-lac.org.uy](http://www.rcctt-lac.org.uy)*

#### **Comité Intergubernamental Negociador sobre químicos peligrosos**

Del 30 de octubre al 3 de noviembre se realizó en Ginebra el VII Período de sesiones del Comité Intergubernamental Negociador (CIN) para un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el procedimiento de Consentimiento Previo Informado (CPI) para ciertos químicos y pesticidas peligrosos en el comercio internacional.

Los delegados discutieron principalmente sobre asuntos relacionados al tiempo entre la adopción del procedimiento CPI en la Convención de Rotterdam y su entrada en vigencia. A pesar de que se avanzó significativamente en el trabajo relacionado a la preparación de la I Conferencia de las Partes (CdP-1), la mayor parte de los temas complejos, particularmente aquellos relacionados al comercio, fueron remitidos para su discusión al próximo período de sesiones del CIN en octubre del próximo año en Roma.

La Convención de Rotterdam fue adoptada en septiembre de 1998 con el objetivo de promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos de cooperación entre las partes en el comercio internacional de ciertos químicos peligrosos, con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente. Doce países han ratificado la Convención que solo entrará en vigencia cuando 50 países la hayan ratificado. Durante el período interino y hasta la realización de la CdP-1, el CIN guiará la aplicación del procedimiento de CPI.

Algunos países en desarrollo expresaron su preocupación sobre el comercio ilegal de químicos. Colombia anotó que la manera como se trate a los no Miembros podría tener implicaciones comerciales importantes en la exportación e importación de químicos bajo el procedimiento de CPI.

*Para mayor información sobre la Convención de Rotterdam, visite la página web: [www.pic.int](http://www.pic.int)*

## Mercosur apunta a sus objetivos

*A nivel de los procesos de integración en América Latina se manifiestan 'buenas' intenciones en relación a la adhesión de Chile al Mercosur, en la armonización de parámetros macroeconómicos y en la fijación de políticas conjuntas por parte de ese bloque regional que es el que más a movido sus fichas en los últimos meses.*

### Comité Mixto de la sociedad civil

La reunión del Foro Consultivo Económico Social del Mercosur (FCES) -creado como órgano de representación de la sociedad civil de los países del bloque en 1994, en Ouro Preto, y fundado en 1996-, acordó realizar antes de fin de año un estudio sobre algunas de las decisiones puntuales que el Consejo del Mercado Común aprobó en julio en la cumbre de Buenos Aires.

El análisis incluye la Decisión n° 22/00 -Acceso a los mercados-, que destaca principalmente la cuestión de la adopción de barreras no arancelarias y la Decisión n° 27/00 -Arancel Externo Común- que está centrada en la formulación de una propuesta metodológica en caso de que sea revisada. En el capítulo correspondiente a la Decisión n° 32/00 -Relacionamiento Externo-, se dará prioridad a las negociaciones entre Mercosur y Chile, y en segundo término a las negociaciones en el ámbito del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); además de las que se desarrollarán con la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Teniendo en cuenta las grandes diferencias entre el cuadro de arancel externo común de uno y otro bloque y los acuerdos internacionales bilaterales que Chile ya tiene, el FCES recomendó al GMC una agenda de negociaciones donde se destacan dos aspectos: la aceleración de las negociaciones del ACE-35 (acuerdo en el ámbito de ALADI) para la liberalización comercial entre ambos, y la inserción de Chile en los ámbitos de promoción de la dimensión social, como por ejemplo su adhesión a la Declaración Socio-laboral del Mercosur.

Este plan de trabajo también incluirá un estudio sobre las políticas de empleo en los cuatro países, de donde deberá salir una recomendación para todo el Mercosur, un estudio sobre una nueva estructura institucional que está siendo debatida en el GMC y un debate sobre la reformulación del propio FCES.

### Chile endureció su postura

Chile endureció su posición respecto de su posible ingreso como miembro pleno al Mercosur, de no existir una acogida por parte de los países miembros a sus planteamientos sobre políticas arancelarias, autonomía comercial y la eliminación de barreras administrativas al comercio recíproco, entre otros

temas. El Presidente Ricardo Lagos advirtió durante su visita a Montevideo el 12 y 13 de octubre, que de no prosperar esta postura, ese país mantendrá su estatus de miembro asociado y se abstendrá de ingresar en el corto plazo como socio pleno al bloque que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Al parecer Chile desea mantener por el mayor tiempo que le sea posible la máxima libertad de acción para seguir celebrando acuerdos y profundizando los existentes de los que es parte.

De todas maneras la fecha para la adhesión de Chile al Mercosur está fijada para el 30 de junio del 2002, y para el primero de enero del 2004 el cronograma de desgravación general del ACE 35 (Acuerdo MS-CH) deberá haber llegado a preferencias del 100 %.

**Teniendo en cuenta las diferencias entre el arancel externo común de uno y otro bloque y los acuerdos bilaterales que Chile ya tiene, el FCES recomendó acelerar las negociaciones del ACE-35 y la inserción de Chile en los ámbitos de promoción de la dimensión social**

### Paso hacia la armonización de políticas económicas

El 31 de octubre, los cuatro países del Mercosur publicaron, por primera vez, cifras económicas basadas en la misma metodología y por consiguiente, comparables. La publicación de indicadores económicos armonizados para 1999 y la primera mitad de 2000 -sobre inflación, deuda del gobierno central y cuentas fiscales- se percibe como un primer paso hacia uno de los principales objetivos del Mercosur: la convergencia de políticas económicas nacionales e integración macroeconómica.

### Brasileños suspenden compra de soja paraguaya, por transgénicos

Empresas brasileñas están suspendiendo sus compras de soja y maíz de procedencia paraguaya debido a la detección de partidas de estos productos que serían de origen transgénico, según el CLAES. Aseguran que la medida es adoptada ante el rechazo de los consumidores brasileños hacia los productos genéticamente modificados y sugieren que las autoridades paraguayas realicen una fiscalización más fuerte sobre estos productos. La empresa Cerealar, con sede en la ciudad de Curitiba, en el Estado de Paraná, envió una nota a la firma Diagro S.A., con domicilio comercial en Ciudad del Este, donde le manifiesta el desistimiento de la adquisición de dichos productos agrícolas, el 30 de octubre pasado.

**AMUMA y pesca, temas centrales del CCMA**

La reunión del 24 y 25 de octubre del Comité de Comercio y Medio Ambiente (CCMA) incluyó una sesión informativa con representantes de cuatro Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente (AMUMA) relacionados con el comercio y discusiones sobre la liberalización comercial en el sector pesquero. También se abordaron otros temas, como servicios y medio ambiente, las relaciones con organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales y la liberalización del comercio de servicios ambientales, y quedaron para la próxima reunión (del 13 al 14 de febrero del 2001) temas como los bienes prohibidos internamente, los ADPIC y las evaluaciones ambientales.

La sesión informativa con representantes de los AMUMA le siguió a una reunión de la OMC y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sobre sinergias entre el régimen comercial global y los regímenes ambientales realizada el 24 de octubre (puede encontrarse información sobre esta reunión en [www.unep.ch/etu/trade/meawto/index.htm](http://www.unep.ch/etu/trade/meawto/index.htm)). El Director General de la OMC, Mike Moore y el Director Ejecutivo del PNUMA, Klaus Töpfer, abrieron la sesión y este último hizo un llamado para que se establezca un sistema de 'detección temprana' de disputas entre la esfera comercial y la ambiental.

Los AMUMA presentes en la reunión fueron la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), el Convenio de Basilea sobre el Control de Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación, la Convención de Rotterdam sobre Consentimiento Previo Informado (químicos), el tratado en preparación sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes y el Foro Intergubernamental de Bosques.

Varios países, sin embargo, reiteraron que existe suficiente flexibilidad en la OMC como para clarificar la relación con los AMUMA sin que sea necesario cambiar las reglas de la OMC. Así se expresaron Brasil, Venezuela, EE.UU., Noruega, Corea, Hong Kong, India, Malasia, Egipto, Nueva Zelanda y Australia.

El segundo tema más discutido fue el de los subsidios a la pesca. Un grupo de países quiere la eliminación de estos subsidios, a lo que se oponen en especial Corea y Japón. Este último país argumenta que son muchos los factores, aparte de los subsidios, que causan el agotamiento de los recursos pesqueros. Corea, por su parte, señala el papel positivo que han tenido los subsidios en su sector pesquero.

La Secretaría de la OMC publicó un documento sobre los beneficios ambientales de la remoción de las restricciones y distorsiones comerciales en el sector. Para la CE, Túnez, Canadá y Noruega el manejo adecuado de las existencias pesqueras es el elemento central del manejo sustentable de las pesquerías y señalaron que el mejor foro para esta discusión es la FAO.

la conservación" y de ser un instrumento chileno para seguir prohibiendo la operación de buques españoles en sus puertos.

**Primera demanda por OGM**

Tailandia presentó el pasado 22 de septiembre una demanda contra Egipto en lo que constituye el primer caso referente a organismos genéticamente modificados (OGM) que llega a la OMC. Egipto prohibió la importación de atún enlatado de Tailandia a partir de enero de 2000, al considerar que contenían aceite de soja genéticamente modificada.

"Objetamos el embargo porque se impone solo sobre productos tailandeses", dijo un oficial de este país. Tailandia no produce soja OGM, aunque sí la importa. Este país no disputa el derecho de Egipto de prohibir la importación de alimentos, sino la discriminación ilegal contra sus exportaciones dada la falta de evidencia de que el aceite contiene OGM.

Las partes tienen dos meses para encontrar una solución negociada antes de solicitar el establecimiento de un panel.

**Nuevo panel sobre camarón-tortugas en OSD**

El Organismo de Solución de Diferencias de la OMC (OSD), se reunió el pasado 23 de octubre para considerar varias solicitudes de paneles, entre ellas una de Malasia para revisar el cumplimiento por parte de EE.UU. de las decisiones sobre el embargo a las importaciones de camarón provenientes de países que Estados Unidos considera que tienen medidas inadecuadas de conservación de tortugas.

Entre tanto, EE.UU. se convirtió el pasado 21 de septiembre en la sexta nación en ratificar la Convención Interamericana para la Protección de Tortugas Marinas, tratado que fue elaborado en respuesta a este mismo caso. Ecuador y Honduras estarían próximos a hacer lo mismo.

**Organo de Apelaciones busca presentaciones espontáneas en caso asbesto**

En lo que equivale a un llamado a que organizaciones de la sociedad civil hagan presentaciones espontáneas (o *amicus curiae*) en el caso entre Canadá y Francia sobre asbesto, el Organismo de Apelaciones de la OMC ha adoptado un procedimiento especial 'adicional' para regular las presentaciones escritas de personas que no son partes directas o terceras partes en esta disputa, en medio de la cual el OSD aceptó el pasado 23 de octubre la solicitud de apelación de Canadá. La fecha límite para presentaciones fue fijada para el 16 de noviembre.

El procedimiento establecido puede encontrarse en [http://www.wto.org/english/news\\_e/news00\\_e/ds-135\\_9.doc](http://www.wto.org/english/news_e/news00_e/ds-135_9.doc) y en <http://www.wto.org/english/news>

Continuación de la página 3

## La amenaza de la 'biopiratería'

### Epipedobates tricolor en manos de Abbott

Desde la década de los setenta, científicos intentaban descifrar el principio activo de la secreción venenosa de una especie de rana nativa del Ecuador: la *Epipedobates tricolor*. Como resultado de sus investigaciones a finales de 1998, la Farmacéutica Abbott lanzó un analgésico considerado 200 veces más poderoso que la morfina a partir de la *epibatidine*.

Los científicos involucrados en la salida ilegal de las ranas, el Jefe del Laboratorio de Química Bio-orgánica del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y el curador del Departamento de Herpetología del Museo Americano de Historia Natural, reunieron varias colecciones de la especie mencionada entre 1974 y 1987 supuestamente 'con fines investigativos'. Sin embargo, no existe registro alguno de su salida en la institución encargada, a pesar de que esa especie hace parte de la Convención CITES -de la cual el Ecuador es miembro desde 1975-.

### Ayahuasca: apropiación de 'conocimientos tradicionales'

La Coalición de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), sentó un importante precedente a inicios de noviembre de 1999 cuando obtuvo la cancelación de la patente sobre la planta *Banisteriopsis caapi*, registrada ante la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales (PTO) de los Estados Unidos.

Esta planta es nativa del bosque tropical amazónico y es utilizada por miles de indígenas de esa región con fines ceremoniales y curativos.

La PTO basó su fallo de cancelación de la patente en el hecho de que las publicaciones que describen a la *Banisteriopsis caapi* eran 'conocidas y disponibles' antes de la petición de registro de la patente. De acuerdo a la Ley de Patentes de Estados Unidos, no se puede patentar como invención algo que haya sido descrito en publicaciones con mas de un año de anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

A pesar de que el fallo fue positivo, la preocupación sobre el posible patentamiento de conocimientos tradicionales y plantas persiste, debido a que los procedimientos de esta oficina de Estado no contemplan consideraciones éticas y culturales para prevenir su patentamiento, en especial en cuanto a otorgar derechos privados sobre un conocimiento o plan de uso comunitario.

Dentro de las reformas requeridas a la PTO se encuentra el cambio de reglas para que los aplicantes de las patentes identifiquen todos los recursos biológicos y conocimientos tradicionales usados en el desarrollo de la invención, además de revelar el origen geográfico y proveer evidencias respecto al consentimiento de su uso por parte del país y las comunidades indígenas de origen.

## PUENTES

Entre el Comercio y el Desarrollo Sostenible

BRIDGES/PUENTES/PASSERELLES/BRÜCKEN

buscan proveer información y análisis sobre la intersección entre el Comercio y el Desarrollo Sostenible para el creciente número de actores de todo el mundo involucrados en el debate. El Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible (ICTSD) y sus organizaciones asociadas reconocen el auspicio del Gobierno Federal Suizo (BAWI) para la publicación de Bridges y el de la Fundación John D. and Catherine T. MacArthur para Puentes y Passerelles.



BRIDGES Between Trade and Sustainable Development es publicado mensualmente por el Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible.

Director: Ricardo Meléndez-Ortiz  
 Editora: Anja Halle  
 Dirección: 13 chemin des Anémones 1219 Ginebra, Suiza  
 Tel: (41-22) 917-8492  
 Fax: (41-22) 917-8093  
 E-mail: ictsd@ictsd.ch  
 Web: http://www.ictsd.org



PUENTES Entre el Comercio y el Desarrollo Sostenible, la versión para América Latina de BRIDGES, es publicada bimestralmente en colaboración con la Fundación Futuro Latinoamericano.

Coordinador: Nicolás J. Lucas  
 Editora: Manuela Botero Thiriez  
 Asesora editorial: María Amparo Albán  
 Asistentes editoriales: Oscar Haro y Marijke Hallo de Wolf  
 Dirección: Casilla 17-17-558 Quito, Ecuador  
 Telefax: (593-2) 920-635/920-636  
 E-mail: ffla@interactive.net.ec  
 Web: http://www.fulano.org



PASSERELLES entre le commerce et le développement durable es la versión en francés de BRIDGES, publicada bimestralmente en colaboración con ENDA-Tiers Monde.

Coordinador: Taoufik Ben Abdallah  
 Dirección: B.P. 3370, Dakar, Senegal  
 Tel: (221) 821-7037  
 Fax: (221) 822-2695  
 E-mail: syspro2@enda.sn  
 Web: http://www.enda.sn



BRÜCKEN Zwischen Handel und Zukunftsfähiger Entwicklung la versión alemana de BRIDGES, es publicada bimestralmente en colaboración con Germanwatch en Bonn, Alemania.

Cordinador: Rainer Engels  
 Tel: (49-228) 60492-0  
 Fax: (49-228) 60492-19  
 E-mail: tradewatch@germanwatch.org  
 Web: http://www.germanwatch.org

Las opiniones expresadas en los artículos firmados en BRIDGES/PUENTES/PASSERELLES/BRÜCKEN son exclusivas de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del ICTSD y las publicaciones. El material de estas publicaciones puede ser utilizado en otras publicaciones con una completa cita de su fuente.

### Bridges Weekly Trade News Digest

Para suscribirse al resumen semanal en inglés del ICTSD de noticias comerciales relevantes para los interesados en Medio Ambiente y Desarrollo, por favor enviar un mensaje a: Majordomo@igc.apc.org. Dejar "subject" en blanco y en el cuerpo del mensaje escribir: subscribe tradedev. Para copias vía fax y correo, también contactar al ICTSD. También disponible en el sitio electrónico del ICTSD.

Todas las reuniones de la Organización Mundial del Comercio se celebran en Ginebra. Las fechas están sujetas a cambios; rogamos ponerse en contacto con la OMC para confirmarlas. Todos los números de teléfono y fax empiezan con (41-22) 739. Los números indicados en la lista que está a continuación corresponden únicamente a las extensiones. Dirección en internet: [www.wto.org](http://www.wto.org)

### EVENTOS

Nov. 27–Dic.1	Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC. Contacto: Peter Ungphakorn, tel: 5412, fax: 5458
Diciembre 1	Comité de Normas de Origen de la OMC. Contacto: Eki Kim, tel: 5584, fax: 5770
Diciembre 4-6	Consejo del Comercio en Servicios de la OMC, sesión especial (negociaciones). Contacto: Nuch Nazeer, tel: 5393, fax: 5458
Diciembre 4-6	Reunión de expertos sobre el impacto de actividades anti-dumping y medidas compensatorias, UNCTAD, Ginebra. Contacto: UNCTAD, tel: 907-5007
Diciembre 4-9	V Período de sesiones del Comité de Negociación Intergubernamental sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP-5), Johannesburgo. Contacto: UNEP Chemicals, tel: 917-8193, e-mail: <a href="mailto:pops@unep.ch">pops@unep.ch</a> , web: <a href="http://irptc.unep.ch/pops">http://irptc.unep.ch/pops</a>
Diciembre 7-8	Consejo General de la OMC. Contacto: Bernard Kuiten, tel: 5676, fax: 5777
Diciembre 11-13	Órgano de Supervisión de Textiles de la OMC. Contacto: J.P. Lapalme, tel: 5223, fax: 5765
Diciembre 11-15	Primera reunión del Comité Intergubernamental del Protocolo de Cartagena. Montpellier Cartagena. Montpellier, Francia. Contacto: Cyrie Sendashonga, secretariado del CDB, tel: (1-514) 2886588, e-mail: <a href="mailto:cyrie.sendashonga@biodiv.org">cyrie.sendashonga@biodiv.org</a>
Diciembre 12	Órgano de Solución de Diferencias de la OMC. Contacto: Paulo Barthel-Rosa, tel: 5095, fax: 5761
Diciembre 18-19	Consejo General de la OMC, sesión especial sobre aplicación. Contacto: Bernard Kuiten, tel: 5676, fax: 5777
Febrero 1	Serie de conferencia de presidentes sobre Organismos Genéticamente Modificados (OGM): "Políticas de desarrollo de cara al debate científico y público". Minneapolis, Minnesota. Contacto: Mark Ritchie, tel: (1-888) 6716214
Febrero 5-9	Consejo de Administración del PNUMA. Nairobi, Kenya. Contacto: B. Miller, tel: (254-2) 623411, fax: 623748, e-mail: <a href="mailto:millerb@unep.org">millerb@unep.org</a>

### PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS

VOGEL, Joseph Henry. 2000. "El Cartel de la biodiversidad: Transformación de los conocimientos tradicionales en secretos comerciales". CARE, Proyecto Subir.

CORREA, Carlos. 2000. "Integrating Public Health Concerns into Patent Legislation in Developing Countries". South Center, Ginebra.

BULLOCK, David. 2000. "The economics of non-GMO segregation and identity preservation". Department of Agriculture, University of Illinois.

ARAYA, Mónica (ed.) 2000. "Comercio y Ambiente: Temas para Avanzar el Diálogo". Organización de Estados Americanos (OEA), Washington, DC.

KÖNZ, Peider (ed) 2000. "Trade, Environment and Sustainable Development: Views from Sub-Saharan Africa and Latin America. A Reader". United Nations University y el Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible, Ginebra.

ROSENBERG, Robin (ed.) 2000. "Environmentally Sound Trade Expansion in the Americas: A Hemispheric Dialogue". University of Miami, Miami.

TUSSIE, Diana (ed.) 2000. "The Environment and International Trade Negotiations. Developing Country Stakes". International Development Research Center, Ottawa.

UNCTAD. 2000. "A Positive Agenda for Developing Countries: Issues for Future Trade Negotiations".

UNCTAD. 2000. "World Investment Report 2000: Cross-border Mergers and Acquisitions and Development".

UNCTAD. 2000. "Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, 2000".

WWF. 2000. "Living Planet Report 2000".

### RECURSOS EN INTERNET

Cumbre Presidencial de América del Sur: análisis del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES): [www.ambiental.net/integración](http://www.ambiental.net/integración)

Environmental Benefits of Removing Trade Restrictions and Distorsions: The Fisheries Sector: documento WT/CTE/W/167 en la página web de la OMC: [www.wto.org/](http://www.wto.org/)

OMC. 2000. "Trade Statistics: World Trade Overview". Selección de estadísticas del intercambio de mercancías y servicios comerciales a nivel mundial y regional. Disponible en: [http://www.wto.org/english/res\\_e/statis\\_e/news\\_e.htm](http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/news_e.htm)

Food First. 2000. "Anatomy of a gene spill: ¿do we really need genetically engineered food?". El documento habla de las implicaciones de la ingeniería genética para la salud humana y para el ambiente. <http://www.foodfirst.org/pubs/backgdrs/2000/f00v6n4.html>

